

ARTÍCULO 16.3

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Desde el siglo XIX, las relaciones Iglesia-Estado han pasado por diferentes momentos pendulares, reflejados en los distintos textos constitucionales. De este modo, la Constitución de Cádiz (1812) señalaba claramente en su artículo 12 que "la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera". Hay que tener en cuenta que de 308 diputados en las Cortes de Cádiz, 97 eran eclesiásticos.

La Constitución de 1837, de cariz progresista, mantuvo la confesionalidad del Estado, pero no se prohibían expresamente otras religiones. Algo que ocurría también en la de 1845. La Constitución "nonata" de 1856, permitía cualquier culto en privado, mientras que la de 1869 fue la primera en reconocer la libertad de culto en España y garantizar su "ejercicio público o privado". Y el proyecto de Constitución federal de 1873 llegó aún más lejos al establecer la separación Iglesia-Estado (artículo 35) y prohibir a los distintos ámbitos de la Administración "subvencionar directa ni indirectamente ningún culto" (artículo 36). La Constitución de 1876 se situaba en un estado intermedio entre la tolerancia religiosa en la práctica privada de las religiones y la confesionalidad del estado.

La Constitución republicana de 1931 tuvo un carácter laico y estableció claramente en su artículo 3 que "el Estado español no tiene religión oficial". Más adelante, el artículo 21 garantizaba "la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión", y el artículo 26 prohibía expresamente a los poderes públicos auxiliar económicamente a las instituciones religiosas y ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Durante el Franquismo, el nacional-catolicismo identificó íntimamente política y religión. Y la confesionalidad del Estado se estableció en el artículo 6 del Fuero de los Españoles.

Finalmente, el texto que nos ocupa buscó un consenso entre el laicismo republicano y la confesionalidad franquista. El consenso que establece pasa por una separación de política y religión, respetando además las diferentes confesiones religiosas y cooperando con ellas. De hecho, el Estado ha firmado los siguientes acuerdos: Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España.

Consideramos que la religión es un aspecto importante de la vida de las personas, pero opinamos también que pertenece al ámbito privado y, por lo tanto, el Estado debería mantenerse al margen.

Cuando fue escrito este artículo de la Constitución la mayoría de la población española era católica y otras religiones minoritarias aspiraban sólo a ser toleradas y respetadas; pero hoy en día, y debido especialmente a la inmigración, otras religiones se han implantado fuertemente en algunas zonas, y ha crecido el número de ciudadanos que se manifiestan ateos o agnósticos.

Actualmente, la prevalencia de la Iglesia Católica es un hecho, especialmente en los cultos públicos (Semana Santa, funerales de Estado, etc.), pero más por tradición que por verdadera vocación.

Valoramos la aconfesionalidad del Estado dado que los poderes públicos tienen en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos pero somos conscientes de que, según las últimas encuestas, la mayoría de los jóvenes se declaran ateos o no creyentes.

En ese sentido, consideramos que la asignatura de Religión debería proponerse como una clase de historia de todas las religiones del mundo, lo que permitiría a los jóvenes tener una idea más clara de cada confesión y, llegado, el caso elegir sus creencias.

Sara C., Paula A., Sergio J., Héctor G., Alberto P. y Gemma A. (3º ESO B)